

SENTENCIA

Relativa al juicio de amparo indirecto **1991/2022** promovido por *****
***** ***** ***, contra actos del **Presidente de la República y otras
autoridades.**

I. ANTECEDENTES.

1. Derecho de réplica. El ***** ** ***** ** ** **

*****, el Presidente de la República dio su conferencia matutina –en
adelante “*La mañanera*” –, a través de la cual difundió información, que la
quejosa estima es *falsa e inexacta* sobre su actividad política.

Con motivo de lo anterior, mediante escrito ***** ** ***** **
*** ** ***** dirigido al Presidente de la República, ***** *****
***** ** solicitó un espacio en la conferencia “*mañanera*” a efecto de
aclarar la información difundida.

2. Negativa del derecho de réplica. El ***** ** ***** **
*** ** ***** el Presidente de la República durante “*la mañanera*” negó
verbalmente el derecho de réplica solicitado.

Esta última determinación constituye el acto reclamado.

II. TRÁMITE DEL JUICIO.

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de
diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común
de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, ***** ***** ***** ***** solicitó el amparo y la protección de la
Justicia de la Unión contra los actos y autoridades precisados en el escrito de
demanda.

2. Incompetencia por materia. Por razón de turno, correspondió el
conocimiento de la demanda a la Jueza Tercero de Distrito en Materia
Administrativa de la Ciudad de México quien, mediante auto de **veintisiete
de diciembre de ese mismo año**, la registró con el expediente **1987/2022** y
se declaró legalmente incompetente por razón de materia, por lo que,
determinó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados
de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

De las **Cámaras de Diputados y Senadores**, ambas del Congreso de la Unión, así como del **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**, dentro del ámbito de su respectiva competencia:

- La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la **Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica** al no prever un mecanismo para ejercer el derecho de réplica frente a autoridades que difunden información a través de espacios informativos.

Particularmente, del **Presidente de los Estados Unidos Mexicanos**:

- La negativa verbal de otorgar derecho de réplica expresada en la mañana el ****** * ***** ** ** * *******
- La omisión de prever y otorgar mecanismos que garanticen el acceso simétrico para ejercer el derecho de réplica frente a las manifestaciones formuladas en las conferencias mañaneras.

Del **Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República** se reclama:

- La omisión de prever y otorgar mecanismos que garanticen el acceso simétrico para ejercer el derecho de réplica frente a las manifestaciones formuladas en las conferencias mañaneras.

V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.

Son ciertos los actos que se reclaman del **Presidente de la República, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión**, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la **Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica**, dado que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados.

Esa certeza se tiene atendiendo al principio de derecho de que las normas generales no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2º, y además con apoyo en la tesis V.2o.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la

XIMENA BEZABE LOPEZ DAVILA
70.66.66.30.63.66.66.000000000000000000.00000000.02.de.sc
24/02/24 14:33:00

Federación, Octava Época, tomo XV-I, febrero de 1995, página 205, que es del tenor literal siguiente:

***"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.** Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas".*

Por otra parte, **también son ciertos** los actos reclamados atribuidos al **Presidente de la República y al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República**, a pesar de que en su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados.

En efecto, por regla general, tratándose de actos omisivos la carga de la prueba corresponde a las autoridades responsables, por lo que, la simple negativa de éstas es insuficiente para demostrar la inexistencia de los actos reclamados.

Al respecto, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión **es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.**

En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En este orden de ideas, pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: **omisiones administrativas**, omisiones judiciales y omisiones legislativas.

Es aplicable la tesis 1a. XVII/2018 (10a.)¹, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

***"CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.** Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones."*

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis **XXIV/98** señaló que para determinar la existencia de una omisión debe, en principio, considerarse si existe una condición de

¹ Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página: 1092

A dicho acuse de recibo, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se le concede valor probatorio pleno, del cual se advierte que la quejosa solicitó al Presidente de la República el ejercicio del derecho de réplica, sin que hasta este momento se haya acreditado por parte de las autoridades responsables haber concedido ese derecho o bien haber dado respuesta por escrito fundado y motivado sobre la improcedencia de la petición.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número **2a. CXLI/97**, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1997, foja 366, que establece:

“ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: “ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.”, constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última.”.

Por el contrario, es un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles que en “la mañana” el **** ** ***** ** ** ** *****², el Presidente de la República negó verbalmente otorgar el derecho de réplica solicitado, de ahí la existencia de los actos reclamados.

Sirve de orientación la tesis **I.3o.C.35 K (10a.)**, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de rubro y texto:

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que

² Visible en el canal oficial de Youtube del Gobierno de México

XIMENA BEZABE LOPEZ DAVILA
70.66.66.30.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130



conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarlo lo que ofrezca en sus términos.”

VI. OPORTUNIDAD.

La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la negativa del derecho de réplica ocurrió el **** ** *****, a través de la conferencia denominada “la mañanera”, fecha en la que la quejosa se hizo sabedora de esa determinación.

Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del **** ** ***** .

En este sentido, si la demanda de amparo se presentó el **veintiséis de diciembre de dos mil veintidós**, se concluye oportuna.

VII. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA.

Previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público y de carácter preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes o alguna que de oficio se advierta.

Para un mejor entendimiento, a fin de evitar repeticiones innecesarias, se estudiarán las causas de improcedencia de manera agrupada, toda vez que, las autoridades responsables fueron coincidentes en invocar algunas de ellas.

a. **Sobre la inexistencia de la omisión reclamada dada la procedencia del procedimiento establecido en la ley reglamentaria.**

La **Cámara de Senadores** expuso en su informe justificado que este juicio de amparo es improcedente dado que, por una parte, la quejosa es ***** ** ** ***** y, por tanto, tiene la facultad de ***** ***** ** ** ** ***** omitió prever los mecanismos que reclama; por otro lado, que la quejosa realizó una interpretación aislada del artículo 2º de la aludida ley, lo que llevó a concluir de forma errónea, la inexistencia de un mecanismo para ejercer el derecho

XIMENA BETZABE LOPEZ DAVILA
70.66.66.30.63.66.66000000.000000.00.00.00.00.02.de.S
24.02.24 14:33:00



actos u omisiones reclamadas no lesionan la esfera jurídica del promovente de amparo, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo.

En consecuencia, cuando se acude en demanda de amparo debe acreditarse en forma fehaciente que el acto u omisión de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente por no acreditarse un interés jurídico.

Con independencia de lo anterior, también se requiere que se lesione el interés legítimo en el supuesto de que no sea directamente titular de un derecho subjetivo contenido en una norma, el cual supone la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

En efecto, para promover el juicio de amparo el solicitante debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos o legítimos, entendiéndose por éstos, lo siguiente:

a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad.

b) El interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

c) El acto u omisión de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular.

d) Para acreditar el interés jurídico o legítimo en el amparo, no es suficiente la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla.

“**ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE.** La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación.”

En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la promulgación, aprobación y orden de publicación de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica al no prever un mecanismo para ejercer el derecho de réplica, a través de espacios informativos.

En ese sentido, se considera que los actos reclamados se ubican dentro de aquellos en los que es materialmente **es posible restituir a la persona afectada en el goce del derecho fundamental violado**, como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, por ser reparable, dado que todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio de amparo.

En efecto, se advierte que, a pesar de que el acto es formalmente legislativo, emitidos por facultad constitucional, exclusiva y soberana del Congreso de la Unión, de modo alguno puede inferirse que, por haberse realizado, esto es, encontrarse aprobada, adquiere la categoría de acto consumados de modo irreparable.

Ciertamente, contra la promulgación, publicación y refrendo de las normas legales no procede el sobreseimiento, pues si bien es cierto que el procedimiento de formación de la ley se integra en dos etapas, la propiamente legislativa o de expedición, a cargo del órgano legislativo y la de promulgación y publicación de la ley, a cargo del ejecutivo, también lo es que dichos actos no pueden considerarse irreparablemente consumados para los efectos del juicio de amparo, puesto que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por lo tanto, ocasionan que la situación subjetiva de carácter general y abstracto, prevista en la hipótesis normativa, se pueda actualizar al aplicarse al caso concreto que regula.

Así, contrario a lo señalado por la autoridad, la expedición o creación de una ley y su promulgación y publicación, son dos etapas interdependientes, cuya existencia aislada impide la vigencia y aplicación de aquéllas. Es por esto que al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional al precepto normativo, tal disposición jurídica deja de producir sus efectos conjuntamente, en el caso concreto a que se refiere el fallo.

existe la imposibilidad jurídica para analizar tales cuestionamientos debido al principio de relatividad de las sentencias, pues la sentencia que al respecto se dicte se ocupará sólo de los individuos particulares, sin hacer una declaración general sobre la ley o acto que la motive.

Expresa que la exigencia de la garantía del derecho de réplica a un sujeto que no se encuentra como obligado, implicaría que a través de una sentencia concesoria, el Estado "*legislara*" a fin de incluir al Titular del Poder Ejecutivo Federal como sujeto obligado a garantizar el Derecho de réplica, sin que ello se establezca en la ley de referencia.

Explica que la quejosa no sólo sería la beneficiada sino la generalidad, pues se materializarían a través de una nueva normatividad, lo que favorecería a cualquier persona, en tanto que las normas emitidas en cumplimiento a un eventual fallo protector tendrían sólo que estar dirigidas a cualquier individuo que se encontrara en el supuesto regulado.

Manifiesta que el artículo 73, fracción XXXI de la Constitución Federal sólo se dirige a establecer las condiciones bajo las cuales podrá exigirse el cumplimiento de la garantía del Derecho de réplica quienes son considerados como sujetos obligados, sin que ello implique conceder que se autorice a los particulares a exigir de autoridades diversas medidas, a quienes no están obligados a garantizar el derecho de réplica, de ahí que, asuma, existe imposibilidad jurídica para que se concreten los efectos restitutorios.

Por su parte, el **Presidente de la República** dice que la quejosa al pretender ordenar, modificar o legislar una norma de carácter general viola el principio de relatividad de las sentencias.

Afirma lo anterior, debido a que asegura que no se puede obligar al Presidente de la República o al Congreso de la Unión a emitir una norma que por sus características tendría efectos de carácter general.

Añade que el juicio de amparo es improcedente, pues de concederse el amparo a la quejosa, su efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales que vincularían no solo al que promueve y a las autoridades señaladas como responsables sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada.

conjunto amplio de sujetos—, así como por los instrumentos organizativos y de ejecución a su disposición, las sedes legislativas y administrativas son las más idóneas para crear las infraestructuras necesarias y remover los obstáculos que impiden la generalización de los derechos.

Sin embargo, ¿qué sucede si esa garantía primaria falla? La existencia de garantías jurisdiccionales de los derechos supone la posibilidad de que la vulneración, por acción u omisión, de las garantías primarias pueda ser impugnada ante un órgano de tipo jurisdiccional, esto es, ante un tribunal independiente e imparcial.

Es en el control constitucional de las leyes donde aparece con frecuencia la tensión entre el Poder Legislativo y el órgano de control jurisdiccional de la constitucionalidad. La tensión se centra en la facultad del tribunal constitucional para declarar la invalidez o inaplicación de una ley aprobada por un órgano del Estado democráticamente electo; este carácter ha sido calificado como “contramayoritario”, porque -se dice- es “contrario a la voluntad popular”, expresada a través de la asamblea legislativa.

Una decisión contramayoritaria es aquella tomada en contra de una mayoría determinada. Sin embargo, normalmente cuando decimos que una decisión de los tribunales constitucionales es contramayoritaria, nos referimos a que, en su caso, va en contra la voluntad de los representantes del pueblo y no del pueblo mismo, dado que es en las normas constitucionales donde se encuentra la máxima voluntad popular y la que los órganos jurisdiccionales deben hacer prevalecer.

De este modo, el juicio de amparo funge como una garantía del derecho de las personas a oponerse a las mayorías legislativas cuando estimen que han sobrepasado los límites de lo decidible en una democracia constitucional como la nuestra, cuando con ello se violen sus derechos humanos.

De este modo, el hecho de que la eventual concesión del amparo tuviera la posibilidad de obligar al órgano legislativo a ejercer sus facultades acorde a la constitución no es motivo para estimar la improcedencia de este medio de control de la constitucionalidad.

En efecto, es importante enfatizar que el juicio de amparo se modificó sustancialmente con motivo de la reforma de **diez de junio de dos mil once**, ya que anteriormente existía una posición muy consolidada en el

En este orden de ideas, el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar únicamente los argumentos de las partes -*supliéndolos si así procediera*- y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, **sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional.**

Lo que implica que, los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es admisible que, al proteger a los quejosos, **indirectamente y de manera eventual,** se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional.

Dicho de otro modo, al partir de la premisa fundamental de la reforma constitucional, no existe cabida para una interpretación restrictiva del principio de relatividad de las sentencias, como en el caso lo pretende la autoridad responsable, que tienda a frustrar el objetivo del medio de control constitucional que en el caso es, la protección de todos los derechos humanos de las personas que acuden con interés jurídico o legítimo a un juicio de amparo.

Por tanto, si con la reforma constitucional multicitada, se permite a los promoventes de amparo, que como aquí, presenten juicio de amparo contra actos que posiblemente *–aunque de manera eventual e indirectamente–* beneficien a personas que no fueron parte en este juicio de garantías, sin contravenir el principio de relatividad de las sentencias, se concluye que la causa de improcedencia invocada es **infundada.**

e. Principio de definitividad (artículo 61, fracción XIV, párrafo tercero y 107, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo).

La **Cámara de Senadores** señala que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, a través del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica (regulado en el capítulo III que comprende de los artículos 20 a 37 de la ley reclamada) previo a la interposición del juicio de amparo, ya que con éste podría modificar la negativa que reclama a diversa autoridad de permitirle hacer uso del mismo.

Aduce que la quejosa no se encontraba en caso alguno de excepción al principio de definitividad, ya que de la lectura de la demanda sólo advierte



cuestiones de legalidad y que, estimar lo contrario, dejaría al arbitrio de los promoventes determinar la procedencia del juicio constitucional.

Por otro lado, el **Presidente de la República** sostuvo que en el capítulo III se establece el procedimiento jurisdiccional a seguir para reclamar cualquier acto relacionado con el ejercicio del derecho de réplica.

Manifiesta que el artículo 58, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación determina que corresponde a un juez de distrito en materia civil la competencia de tal procedimiento especial, de ahí que, asegure, debió agotar el juicio civil antes de acudir al juicio de amparo.

En principio es necesario establecer el contenido de los artículos 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, inciso b) de esa misma ley, como sigue:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

(...)

Quando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.”

“Artículo 107. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

(...)

b) Las leyes federales;

(...).”

El texto del precepto transcrito es la expresión normativa del **principio de definitividad** que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de

impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.

Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente.

Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerza y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.

Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública.

Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados.

De igual forma, los tribunales de la federación han desarrollado jurisprudencialmente otras excepciones a este principio. Una de esas excepciones es la relativa a que, no será necesario agotar los medios ordinarios cuando **se impugnan normas generales**.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo **61**, fracción **XIV**, párrafo tercero, de la Ley de Amparo¹⁴, se dispone que si contra el primer acto de aplicación de la norma reclamada procede algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado,

¹⁴ Artículo 61. (...) XIV. (...)

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. (...)"

f. Autoridad para efectos del juicio de amparo.

El **Presidente de la República** expresa que no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

Sostiene que la ley reglamentaria impugnada prevé un procedimiento jurisdiccional especial del orden civil, que se sigue a petición de parte, respecto de los sujetos obligados referidos en el artículo 4° de ese ordenamiento.

Refiere que los actos relacionados con el derecho de réplica no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo al tratarse de una relación de coordinación entre la persona que difundió la información y quien solicita la réplica o la aclaración de esa información.

Explica que no tiene el carácter de autoridad responsable por no encontrarse encuadrado en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo porque la quejosa se encuentra en un plano de igualdad con los sujetos obligados a que se refiere esa ley que rige al derecho de réplica.

Insiste que el procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 6°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, al ser de orden civil, se tramita a petición de parte ante un juez de distrito en materia civil a efecto de determinar la forma que habrá de verificar la réplica, por lo que a ninguna de las partes (demandado y demandante) les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo ni sus actuaciones constituyen actos de autoridad.

En este apartado se procederá al análisis de la causa de improcedencia (no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo) prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen en su orden lo siguiente:

"Artículo 61. *El juicio de amparo es improcedente:*

(...)

XXIII. *En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."*

AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: **"AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.** El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

Del criterio transcrito se advierte, que las características que una **autoridad** debe tener para que se le considere como responsable para los efectos del juicio de amparo son:

- 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular;

- 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;

- 3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,

- 4) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Por tanto, se concluye que, para efectos del juicio de amparo, una autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, tales facultades constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad.

En términos del artículo 80 de la Constitución Federal, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará "*Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.*"

Por su parte, el Presidente de la República tiene como facultades y obligaciones las que establece el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, las enlistadas únicamente son enunciativas, mas no limitativas, pues la última fracción, esto es la XX, refiere a "*las demás que le confiere expresamente esta Constitución*", lo que se traduce en que ésta no será cualquiera sino aquella que se encuentre regulada en una ley.

Es dable precisar que, la parte quejosa reclama en esta vía la promulgación, aprobación y orden de publicación de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica al no prever un mecanismo para ejercer el derecho de réplica, a través de espacios informativos, por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, así como la negativa del derecho de réplica por parte del último en mención.

De acuerdo con las diversas redes sociales del Gobierno de la República, con respecto a la conferencia matutina se dice: "*De lunes a viernes, a las 7:00 horas, mantenemos un diálogo circular con representantes de los medios de comunicación al término de la reunión con Gabinete de Seguridad*".

Este tipo de conferencias es un ejercicio inédito de comunicación política a través del cual se difunde personalmente por el Presidente de la República el quehacer gubernamental, acciones y/o logros de Gobierno.

Sin embargo, ese ejercicio trasciende a lo estrictamente informativo y se ha convertido en un verdadero elemento de gobernabilidad desde

acorde a la naturaleza de la información difundida, como sucede en este caso.

Con base en lo anterior, no puede establecerse que la quejosa y el representante del Ejecutivo Federal se encuentren en un plano de coordinación, pues la información que éste brinda cada mañana a las personas genera una posible asimetría informativa en el mercado de las ideas. Por tales consideraciones, ésta causa de improcedencia resulta **infundada**.

Finalmente, al no encontrarse en supuesto alguno que haga improcedente este juicio de amparo, lo procedente es estudiar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa.

VIII. ESTUDIO DE FONDO.

1. Argumentos de la quejosa.

La quejosa señala en su **primer concepto de violación** que el derecho de réplica tiene una función reparadora para la persona que se ve afectada en su honra y reputación, ya que afirma que, cuando se difunde información falsa sobre una persona, ello puede distorsionar la realidad o predisponer a la sociedad a que adopte algún punto de vista y con ello afectar la imagen.

Explica que la función del derecho de réplica es la de difundir una versión distinta de cierta información para que esté a disposición de los receptores y que tengan mayores elementos para formarse una opinión al respecto.

Además, menciona que el derecho de réplica no es una limitación al derecho a la libertad de expresión.

Señala que es inconstitucional la negativa a su derecho de réplica por parte del Presidente de la República, derivado de la información falsa e inexacta que difundió sobre su persona en la conferencia "*mañanera*".

Refiere que desde que éste asumió la Presidencia de la República implementó un ejercicio de comunicación denominado "*conferencias mañaneras*", en el cual, de lunes a viernes a las siete de la mañana, informa temas relevantes, resuelve dudas a periodistas que se encuentran presentes y brinda información masiva realizándolo con recursos públicos.

Menciona que la información brindada por el Ejecutivo Federal fue emitida en su calidad de servidor público y utilizando recursos públicos para su emisión (personal, instalaciones, equipo, etcétera) y que está sujeta a un parámetro de verificación reforzada por ser asuntos de trascendencia pública.

Manifiesta que el derecho de réplica adquiere mayor relevancia tratándose de información oficial al constituir un mecanismo de rendición de cuentas que amplía las posibilidades del control ciudadano, lo que servirá para tener mayores elementos a la versión oficial y que haya un contrapeso que fortalezca al Estado democrático.

Reitera que la “*conferencia mañanera*” es una forma de emitir política de comunicación social debido a que da a conocer entre otras cosas, los avances del gobierno federal, por lo que el Presidente de la República es el encargado de la transmisión y emisión de la información y que será el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República el encargado de habilitar espacios para ejercer el derecho de réplica, sin que en el caso, haya una persona encargada de recibir las solicitudes de réplica y en consecuencia, no haya una obligación de brindar una respuesta formal.

Luego de explicar en qué consiste la libertad de expresión, el derecho a la información y la asimetría entre los sujetos que participan en la expresión de ideas, en el **segundo concepto de violación** la quejosa sostiene que existe asimetría entre el Presidente de la República y ésta que no le permite contra argumentar los comentarios realizados, lo que afecta su actividad generando un efecto inhibitorio.

Expone que el Presidente de la República y ella en su calidad de *********, revisten el carácter de figuras públicas pero que el acceso a los medios de comunicación para contrargumentar la información inexacta y falsa que se formuló en su contra es reducido frente al de aquél al no encontrarse en igualdad de condiciones frente al efecto de una “*conferencia mañanera*”, de ahí, exalta la existencia de la asimetría.

Refiere que el alcance de estas conferencias es mayor al que detenta ella, dado que tiene una penetración mediática al tener mayor número de publicaciones, reproducciones y suscripciones.

Después de explicar en qué consiste la seguridad jurídica y sus alcances, en el **tercer concepto de violación** la quejosa aduce que es

inconstitucional la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho de Réplica al no prever el ejercicio de derecho de réplica de un ciudadano frente a una autoridad que difunde información falsa e inexacta en un espacio informativo realizado con recursos públicos.

En efecto, manifiesta que la ley que regula ese derecho no contempla la posibilidad de ejercerlo frente a servidores públicos que tienen espacios de comunicación masiva.

Señala que los sujetos obligados, a los que se refieren los artículos 2 y 4 de la norma impugnada, se vio ampliado por la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 122/2025 y sus acumuladas al considerar como tales también a los emisores de información y responsables del contenido original y que no sólo es considerados como tales a los canales convencionales sino a aquellos poco convencionales que tuvieran un eco o impacto similar.

Argumenta que la ley impugnada no contempla como sujeto obligado a una autoridad que difunda información a través de mecanismos de comunicación “*tradicionales*” creado para tal efecto –*como lo es el Ejecutivo Federal*- porque ésta sólo regula a los privados.

Explica que de conformidad con la Constitución Federal y la Convención Americana de los Derechos Humanos es obligación del Estado Mexicano proveer los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho de réplica ante cualquier persona que difunda información masiva, como lo es el Presidente de la República, esto es, ante cualquier persona que difunda información inexacta y falsa en un programa de información masiva.

Refiere que la falta de regulación oportuna en materia de derecho de réplica respecto de la relación entre servidores públicos con programas de comunicación pagados con recursos públicos permite actuaciones de autoridad arbitrarios, dando la oportunidad de emitir información falsa e inexacta respecto de los ciudadanos, periodistas o actores sociales sin que se les otorgue la posibilidad de rectificar esa información, además de la permisibilidad de que inexistiera una consecuencia.

Luego de exponer en qué consiste la fundamentación y motivación, en el **cuarto concepto de violación** la quejosa expresa que la negativa a

brindarle el ejercicio del derecho de réplica por parte del Presidente de la República vulnera el principio de fundamentación y motivación.

Dice que el ***** ** ***** ** ** ** ***** , el Ejecutivo Federal expresó que ella había dicho que *** * ***** ** ***** * ** ***** ***** * ** ***** ***** ***** , motivo por el cual solicitó su derecho de réplica para ejercerlo en la "conferencia mañanera", debido a que esa información era inexacta y falsa, pero al día siguiente aquél expresó que ** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** * ** ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ** ***** .

Explica que al dar respuesta en sentido negativo a su solicitud no señaló fundamentos ni motivos para negarlo y que, en consecuencia, se encuentra en un estado absoluto de indefensión y no se le dio la oportunidad de examinar si el actuar de la autoridad es conforme o no a la Constitución Federal o a la ley.

Después precisar en qué consiste el principio de seguridad jurídica en su vertiente de interdicción a la arbitrariedad, en el quinto concepto de violación sostiene que la ley impugnada no regula el ejercicio de derecho de réplica frente a pronunciamientos inexactos o falsos emitidos por una autoridad en un espacio de comunicación realizado con recursos públicos.

Destaca que, por tal razón, existe la posibilidad de que la autoridad actúe de forma arbitraria y excesiva en cuanto al otorgamiento y reconocimiento del ejercicio del derecho de réplica y que no se cuente con los medios necesarios para que se reconozca ese derecho.

Manifiesta que la negativa a su solicitud de derecho de réplica la deja en estado de indefensión, frente a pronunciamientos inexactos y falsos que son sujetos a ser replicados pero que contrario a ello, esa prohibición hace que se encuentre sujeto a la voluntad de la autoridad de brindar ese derecho, violando su derecho de seguridad jurídica en su vertiente de interdicción arbitraria o prohibición en exceso.

2. Puntos a resolver.

De la síntesis efectuada se obtiene que la parte quejosa pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica -al no prever un mecanismo para ejercer el derecho de réplica, a través de espacios informativos- con motivo de la negativa a su derecho de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

réplica, por parte del Presidente de la República, inobservando el principio de seguridad jurídica, fundamentación y motivación; de este modo, en la presente sentencia, se dará respuesta a las siguientes interrogantes:

- i) ¿La Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica prevé un mecanismo que garantice el ejercicio de ese derecho frente a autoridades como el Presidente de la República cuando difundan información falsa o inexacta y, por tanto, debe considerarse sujeto obligado?
- ii) ¿El Presidente de la República está obligado a garantizar el derecho de réplica en su conferencia matutina respecto de la información difundida de la quejosa?

A fin de dar respuesta a las anteriores interrogantes, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales.

3. Marco constitucional y legal de los principios y derechos constitucionales en juego.

Principio de seguridad jurídica

En diversos precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el **principio de seguridad jurídica** se encuentra reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, en la medida en que tutela el derecho del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, su estado de indefensión.

La esencia del derecho a la seguridad jurídica versa sobre la premisa relativa a "*saber a qué atenerse*" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad, y, respecto de los actos legislativos, exige el establecimiento de normas que otorguen certeza a los gobernados.

No obstante, a pesar que el artículo 16 de la Constitución contenga la tutela de la seguridad jurídica de la situación del gobernado frente a la regulación existente y la conducta del Estado, **no debe entenderse** en la dimensión que el ordenamiento jurídico *-y en específico las porciones normativas-*, deben señalar de manera especial el procedimiento que regula las relaciones entre los particulares y las autoridades, sino únicamente

En consecuencia, para evaluar la violación de la libertad de expresión, así como de la información, debe tomarse en consideración dos requisitos: **el de veracidad, entendido como la certeza de que la declaración corresponde a un tercero; y el de relevancia pública de lo informado.**

Por su parte, para garantizar el derecho a la información por parte de autoridades quienes en ejercicio de su función pública difundan algún tipo de información, existe una ley que lo procura y es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que garantiza el principio democrático de publicidad de los actos del gobierno transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.

Por tanto, tiene como base fundamental la de **dar publicidad a la información pública**, esto es, la establecida en el artículo 6° Constitucional, transparentando el ejercicio de la función pública por parte de los sujetos obligados, los cuales administran, manejan, archivan y conservan tal información, la cual pondrán a disposición de las personas (por ser de interés público), incluso, a través de medios alternativos de difusión de la información cuando éstos resulten de fácil acceso y comprensión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación, esto es, ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones.

De este principio se derivan las siguientes consecuencias: (a) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, **de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información**; (b) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y, (c) **ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información.**

La primera consecuencia del principio de máxima divulgación es que el derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción.

El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, sino que puede estar sujeto a limitaciones. Sin embargo, la Corte Interamericana

En México, el Congreso de la Unión aprobó en octubre del dos mil quince la "*Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución, en materia de Derecho de Réplica*", la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de noviembre de ese año.

La mencionada Ley cuenta con cuatro capítulos que expresan sus contenidos y funciones: definiciones generales (1), procedimientos ante los sujetos obligados (2), procedimientos judiciales (3) y sanciones (4). En cuanto a las primeras, destacan la del derecho de réplica y la de sujeto obligado, en tanto que este derecho otorga a las personas la posibilidad de lograr que se corrija la información inexacta o falsa que respecto de ellas se hubiere dado a conocer y pudiera afectarlas.

La ley distingue claramente entre los procesos de garantía del derecho de réplica y los de reparación de los daños o perjuicios que eventualmente se ocasionen a las personas.

Por ello, quien además de la rectificación busque ser indemnizado por daño moral, deberá ejercer una acción completamente autónoma ante los tribunales ordinarios.

Luego, por estar vinculado el derecho de réplica con el de libre expresión de las ideas, la ley determina que los sujetos obligados a respetarlo son los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes y **cualquier otro emisor de información responsable del contenido original**.

De este modo, el sujeto que se considere agraviado por la información falsa o inexacta producida o transmitida por cualquiera de ellos, podrá ejercer su derecho a fin de que, en su caso, se logre la rectificación necesaria para corregirla, la que por disposición de la Ley, deberá publicarse o transmitirse de manera gratuita, sin comentarios o consideraciones que desnaturalicen su función, en plazos perentorios y en condiciones semejantes a las de expresión de la información que haya de corregirse.

El derecho de réplica puede ejercerse mediante dos procedimientos vinculados, el primero de ellos ante los propios sujetos obligados, iniciado con la presentación de la solicitud del afectado y el texto de lo que se busca aclarar; si el sujeto obligado acepta la "*rectificación*", ésta se publicará o transmitirá en las condiciones ya señaladas y conforme a las particularidades de cada medio; si el sujeto obligado no responde a la solicitud, no acepta llevar a cabo la corrección, la acepta pero no la realiza o

hecho que se informa y, consecuentemente, que no produzcan un agravio ya sea político, económico, en el honor, vida privada y/o imagen, no dan procedencia al ejercicio del derecho de réplica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis **1a. CXLVII/2017 (10a.)**, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **“DERECHO DE RÉPLICA. INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA.”**

Hasta aquí el marco constitucional y legal aplicable.

4. Estudio de constitucionalidad de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

Previo a realizar la calificativa de los conceptos de violación, es importante reiterar que, en el caso en concreto, la parte quejosa se duele de la inconstitucionalidad de la *“Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica”* al no prever mecanismos para ejercer el derecho de réplica, a través de espacios informativos como lo son las conferencias *“mañaneras”* que son llevadas a cabo por el Presidente de la República.

Para dilucidar el primer punto, es necesario traer el contenido de la sentencia de la **acción de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015¹⁷** emitida el uno de febrero de dos mil dieciocho por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere, en lo conducente (a efecto de abordar y dilucidar la inconstitucionalidad que se alude) lo que sigue:

“39. El poder o impacto que los medios de comunicación pueden llegar a tener en el “mercado de ideas” no sólo debe entenderse como la posibilidad de influir o promover activamente su visión sobre un problema o situación determinada —tal como lo sostuvo la Primera Sala—, sino que les es posible, inclusive, restringir o limitar la difusión de opiniones o posturas que sean opuestas a la suya. En este sentido, si bien es cierto que el concepto de un “mercado de ideas” permite explicar la forma en que se intercambia información en una sociedad plural, sería ilusorio —o inclusive, como algunos han sugerido, “romántico” — considerar que cualquier persona está en igualdad de posibilidades para difundir sus ideas. Por el contrario, es necesario reconocer que, por un lado, existen barreras que naturalmente imposibilitan el acceso igualitario a los medios de comunicación —principalmente a los “masivos”, que suelen estar concentrados en pocas personas e intereses— y, consecuentemente, resultan igualmente limitadas las posibilidades de que una idea en particular sea difundida. Por otro lado, también debe reconocerse que dentro del propio mercado de ideas, los distintos medios de comunicación no necesariamente tienen el mismo peso, puesto que entre otros factores, tiene que tomarse en cuenta el tipo de medio de que se trate (escrito, radio o televisión), su cobertura (nacional, internacional, local o regional) o la periodicidad de su difusión.

¹⁷ Sentencia de 1 de febrero de 2018, Ministro ponente: Javier Laynez Potisek



que el legislador haya establecido, por un lado, supuestos más concretos de aplicación y, por otro, una categoría que únicamente prevea criterios materiales que describen las condiciones de aplicación de la misma, no sólo resulta constitucional sino que inclusive, abona a la protección de la libertad de expresión de quienes sean aludidos por la difusión de un mensaje. Ello porque asegura que casos aún no previstos expresamente por el legislador pero que cumplan con la misma lógica que los sujetos específicamente señalados, podrán ser incluidos en la norma.

82. De esta manera, el derecho de réplica tendrá su protección óptima en la medida en que sea posible considerar como sujetos obligados no sólo a los canales “convencionales” de difusión de noticias, sino también a aquellos medios poco convencionales o novedosos, pero que en virtud de los constantes cambios tecnológicos o sociales pudieran tener acceso al mercado de información con un eco o impacto similar —o inclusive mayor— que el de los medios de comunicación “tradicionales” para la difusión de cierto mensaje o hecho informativo, y notoriamente mayor al que pudiera tener la persona aludida por sus propios canales.

83. Esto no quiere decir que toda persona que difunda un mensaje puede o debe ser considerado como “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original” y consecuentemente como sujeto obligado. Para definirlo, en primer lugar, debe atenderse al contexto y lógica que siguió la ley para determinar quiénes son sujetos obligados. En este sentido, conforme a lo previsto en el 2, se trata de aquellas personas físicas o morales que generen o difundan masivamente información:

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

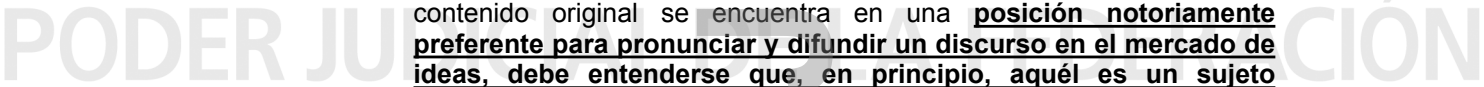
(...)

III. Medio de comunicación: La persona, física o moral, que presta servicios de radiodifusión; servicios de televisión o audio restringidos; o que de manera impresa y/o electrónica difunde masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que opera con sujeción a las disposiciones legales aplicables.

IV. Productor independiente: La persona, física o moral, que genere y sea responsable de producir contenidos que sean publicados o transmitidos por los medios de comunicación.

84. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta si existen condiciones de inequidad entre el emisor de un mensaje y quien se estime aludido por el mismo. En efecto, dado que el derecho de réplica garantiza el acceso a cierto medio para difundir un mensaje bajo la presunción de que el sujeto aludido no está en una posición equitativa para manifestar y difundir su dicho, se estima que para definir qué emisor de contenido original debe o no ser considerado como “sujeto obligado” se tiene que atender a la existencia o no de un equilibrio respecto de las posibilidades para difundir o dar respuesta con similar intensidad a cierta información. Es decir, si el emisor de cierto mensaje de contenido original se encuentra en una posición notoriamente preferente para pronunciar y difundir un discurso en el mercado de ideas, debe entenderse que, en principio, aquél es un sujeto obligado, siempre que se acrediten los demás requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria.

85. En este sentido, que el fraseo utilizado por el legislador no permita identificar ex ante y con absoluta precisión a todos y cada uno de los sujetos o, inclusive, el hecho de que sea posible que un sujeto sea indebidamente considerado como obligado, no implica que el precepto deba invalidarse en este momento dado que este Alto Tribunal está ejerciendo un control abstracto sobre la regularidad de normas.



televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.

99. Asimismo, si por cualquier circunstancia no se solicita la réplica en el momento de la transmisión en vivo, el interesado lo podrá ejercer con posterioridad, en los términos que prevé el segundo párrafo del artículo 10:

Artículo 10. (...)

Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente:

(...)

100. Esta interpretación es congruente con lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, de la Ley de Réplica que señala como causal para negar el ejercicio del derecho de réplica el que “se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado”. Es decir, a contrario sensu, **si se trata de transmisiones en vivo y la réplica no se realizó, el sujeto obligado no puede negarse a difundirla.**

101. Finalmente, si a juicio del medio de comunicación no es procedente la réplica y por ello se negó la posibilidad de transmitirla durante el programa en vivo, el afectado tiene abierta la posibilidad de iniciar el procedimiento judicial respectivo.

102. Por otro lado, el promovente considera que la falta de referencia del artículo 7 de la Ley a los “programas en vivo” implica que los medios de comunicación no están obligados a contar con una persona responsable de atender las solicitudes de réplica. Tal exclusión no se desprende ni de la lectura del precepto impugnado ni de algún otro. **En efecto, el artículo 7 no hace distinción alguna respecto de qué sujetos deben cumplir con tal obligación y cuáles no, por lo que su correcta interpretación permite concluir que cualquier sujeto obligado, sin importar el formato de sus programas o de la información que publican, están igualmente obligados a cumplir con su contenido.**

103. Por las razones antes precisadas, este Alto Tribunal considera que los artículos 7 y 10, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria no son contrarios a la Constitución Federal.”

De la sentencia transcrita, podemos advertir que del contenido del artículo 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica, permite considerar como sujetos obligados a cualquier persona que difunda información por cualquier medio, en virtud de que se prevén por una parte, supuestos específicos que la referida ley señala como “*sujetos obligados*” (medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes) y por otro, se precisa una categoría “*general*” (cualquier otro emisor de información responsable del contenido original) que permite también considerar como sujetos obligados a quienes cumplan con dos condiciones materiales:

1) Ser emisores de información, y

Ahora bien, en adición a los supuestos específicos que la Ley prevé como “sujetos obligados” -medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes-, se incluye una categoría general que permite también considerar como sujetos obligados a quienes cumplan con dos condiciones materiales: (I) ser emisores de información, y (II) responsables del contenido original.

Al respecto, al resolver el **amparo en revisión 635/2017**, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dado que el derecho de réplica garantiza el acceso a cierto medio para difundir un mensaje bajo la presunción de que el sujeto aludido no está en una posición equitativa para manifestar y difundir su dicho, se estima que para definir qué emisor de contenido original debe o no ser considerado como “sujeto obligado” se tiene que atender a la existencia o no de un equilibrio respecto de las posibilidades para difundir o dar respuesta con similar intensidad a cierta información.

Es decir, si el emisor de cierto mensaje de contenido original se encuentra en una posición notoriamente preferente para pronunciar y difundir un discurso en el mercado de ideas, debe entenderse que, en principio, aquél es un sujeto obligado, siempre que se acrediten los demás requisitos exigidos por la Ley Reglamentaria.

En este sentido, si bien la norma reglamentaria no incluyó expresamente a autoridades como el Presidente de la República respecto de la información que difunde en su conferencia matutina, ello **no excluye la posibilidad de realizar una interpretación conforme con el bloque de regularidad constitucional que lo incluya como sujeto obligado.**

Se explica.

Ciertamente, en la resolución del ya mencionado **amparo en revisión 635/2017**, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al analizar la naturaleza del derecho de réplica que no es dable concebirlo o reducirlo a una simple limitación a la libertad de expresión, pues con ello se desnaturalizaría su función normativa y performativa que está llamado a realizar dentro del sistema jurídico mexicano, esto es, en su carácter de derecho fundamental *para la efectiva protección de la honra, la reputación y la adecuada formación de la opinión pública*, de ahí que debe dársele tal trato jurídico de derecho fundamental.

Es así, expresó la Sala, pues entender al referido derecho como parte del parámetro de regularidad constitucional, conlleva, entre otras cuestiones, a que el operador jurídico, al momento de examinar las disposiciones



secundarias que pretenden darle contenido y eficacia, **tenga el mandato de interpretarlas de la manera más favorable posible para la persona**, es decir, **de la manera más amplia o extensiva permisible por el sistema jurídico positivo, de tal suerte que no sólo se salvaguarde, sino que se maximice su ámbito protector.**

Por el contrario, de concebirse al derecho de réplica, rectificación o respuesta *como una mera limitación a la libertad de expresión* -y no como un derecho humano-, conllevaría a que el operador jurídico se constrañera a realizar una interpretación restrictiva de tal institución jurídica, y de las leyes que lo reglamentan.

En esa inteligencia, determinó la sala, que no es acertado vislumbrar al derecho de réplica, rectificación o respuesta en sentido negativo, esto es, como una amenaza, afrenta o limitación a la libertad de expresión, por el contrario, debe entenderse como un verdadero derecho humano que debe de tutelarse y maximizarse para proteger la dignidad de las personas, es decir, como un medio elemental no sólo para salvaguardar de manera eficaz la honra y la reputación de las personas, **sino para lograr el equilibrio informativo que permita que la sociedad cuente con los elementos necesarios para formarse una opinión más comprensiva respecto de hechos o juicios que fueron divulgados por los medios de difusión.**

En este sentido, la Segunda Sala refirió que al examinar la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, **no es dable al operador jurídico realizar una interpretación limitativa o restrictiva del derecho de réplica, rectificación o respuesta**, por el contrario, al tratarse de un verdadero derecho humano, debe entenderse de la manera más amplia o favorable posible para la persona, a fin de tutelar y maximizar las dimensiones individuales y colectivas que entraña ese derecho de rango fundamental.

Lo anterior no implica que se desconozca que su ejercicio pueda, en algunos casos, tener injerencia en la libertad de expresión y el acceso a la información, sino simplemente conlleva a que, en tanto derecho humano, los posibles conflictos que en su caso llegasen a suscitarse respecto de aquéllos derechos, se resuelvan, precisamente, bajo una “teoría de la ponderación o armonización de los derechos humanos”, y no bajo una “teoría de las restricciones a éstos”.

Por ende, si como se ha expuesto, el derecho de réplica, rectificación

de los hechos.

Bajo este línea jurisprudencial, en una interpretación amplia y favorecedora del ejercicio del derecho, se debe concluir que La Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica **sí prevé un mecanismo que garantice el ejercicio de ese derecho frente a autoridades como el Presidente de la República cuando difunda información falsa o inexacta y sea responsable del contenido original y, por tanto, debe considerarse sujeto obligado.**

En efecto, como se vio, además de los medios de comunicación, agencias de noticia y de productores independientes, también es un **sujeto obligado** en términos de la referida ley, cualquier otro que cumpla con las siguientes características:

- a) Ser emisor de la información.
- b) Responsable del contenido original.
- c) Debe tener un eco similar o mayor que los canales de difusión de noticias “*tradicionales*” en el mercado de información.
- d) Debe encontrarse en una posición notoriamente preferente para pronunciar y difundir un discurso en el mercado de ideas.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 4, fracciones I y VI, de Ley General de Comunicación Social¹⁸ reconoce como **campañas de Comunicación Social** a aquellas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. Y los como **Medios de Comunicación** a aquellos que pueden ser captados simultáneamente por gran cantidad de individuos a través de medios electrónicos, medios impresos, medios complementarios, medios digitales y **medios públicos**, en términos de es la ley aludida.

Ahora bien, las conferencias matutinas brindadas por el Presidente de la República todos los días a las siete de la mañana en el Palacio Nacional, de acuerdo con el propio Gobierno Federal son espacios de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, como se dijo anteriormente en esta sentencia, ese ejercicio trasciende a lo estrictamente informativo y se ha convertido en un verdadero elemento de gobernabilidad desde donde se

¹⁸ En su texto vigente al veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, según la declaratoria de invalidez decretada en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023.



marca en buena medida la agenda nacional, desde donde se ejercen actos de gobierno y/o se realizan afirmación o se difunde información sobre personajes concretos.

Cabe destacar que toda la información ahí generada tiene amplia difusión directa a través de los medios de comunicación tradicionales y a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y Spotify; del mismo modo, cuenta con una cobertura permanente los diferentes medios de comunicación que incrementa el potencial de persona destinatarias.

De acuerdo con la información publicada en el portal “Aristegui Noticias”, las conferencias de prensa matutinas en enero de dos mil veintiuno acumulaban 235 millones de vistas en el canal de YouTube del presidente ***** , mientras que los canales oficiales del Gobierno de México, de Cepropie y Canal Catorce suman en conjunto 50 millones de visualizaciones. En promedio, cada conferencia en el canal de López Obrador tiene 439 mil reproducciones, aunque la más vista llegó a los 4 millones 430 mil visualizaciones¹⁹.

En la revista “**Expansión**” fue publicado un reportaje sobre cómo la “*mañanera*” transformó la estrategia de comunicación presidencial, esto es, tres ex voceros presidenciales reconocieron la efectividad de esta forma de comunicación.²⁰

Por tanto, si aquél es un emisor de la información (brinda conferencias matutinas todas las mañanas dentro del Palacio Nacional), responsable de su contenido (por corresponder a sus facultades como representante del Ejecutivo, transparentando el ejercicio de la función pública), el cual tiene un eco incluso mayor a los canales de difusión de noticias en el mercado de información y se encuentra en una posición notoriamente preferente para pronunciar y difundir en el mercado de ideas (al ser el representante del Ejecutivo, que por su investidura y por los alcances ya mencionados se encuentra en una posición superior), **debe ser considerado como sujeto obligado en términos del artículo 4º de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica.**

¹⁹ <https://aristeguinoticias.com/1401/mexico/mananeras-integras-acumulan-235-millones-de-vistas-en-canal-de-youtube-de-amlo/>

²⁰ <https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/10/07/cuanto-cuestan-las-mananeras-presidencia-nos-dio-sus-datos>



la información en su dimensión social.

Lo cual permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior inexacta, esto es, le permite contar con mayores elementos informativos, a efecto de que se encuentren en una mejor aptitud de concebir los hechos o juicios que fueron divulgados por los medios de difusión y, con ello, propiciar **el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática**

Establecido lo anterior, la quejosa sostiene que la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica no contenía un procedimiento adecuado e idóneo para proteger ese derecho ante un ejercicio informativo como la conferencia mañanera, sin embargo, como se vio, a pesar de que esa norma no incluyó específicamente autoridades como sujetos obligados, si es posible reconocerlos como sujetos obligados en los términos de esta sentencia, por lo que, **son infundado los conceptos de violación sobre este aspecto.**

Por tanto, al haber resultado infundado los conceptos de violación expresados respecto de la **Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Federal, en materia del Derecho de Réplica debe negarse la protección constitucional,** en relación con dicha norma.

Negativa que se hace extensiva a la omisión de prever y otorgar mecanismos que garanticen el acceso simétrico para ejercer el derecho de réplica frente a las manifestaciones formuladas en las “conferencias mañaneras”, dado que esos mecanismos están claramente señalados en la norma.

5. Estudio de constitucionalidad respecto a la negativa verbal de otorgar derecho de réplica por parte del Presidente de la República.

Superada la cuestión de constitucionalidad de la norma general, corresponde ahora analizar el acto de aplicación consistente en la negativa verbal expresada por el Presidente de la República en relación con la petición de réplica hecha por la quejosa.



***** ** ** * ***** ***** ** ***** ** *****
***** ***** * ***** ***** ***** *******

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Lo que revela que, la parte quejosa solicitó su derecho de réplica para aclarar la información difundida, a través del mismo espacio informativo donde asegura, se sostuvo información “*inexacta*” y “*falsa*”; sin embargo, le fue negada de manera verbal en los términos expuestos.

En este sentido, corresponde ahora dar respuesta a la segunda interrogante planteada ¿El Presidente de la República está obligado a garantizar el derecho de réplica en su conferencia matutina respecto de la información difundida de la quejosa?

Para dirimir la interrogante, es oportuno mencionar que la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en su **amparo en revisión 91/2017**²⁵ de **veintitrés de agosto de dos mil diecisiete** estableció que el derecho de réplica, rectificación o respuesta se entiende, en términos generales, como *"la posibilidad que tiene toda persona de aclarar información sobre hechos, falsa o inexacta, difundida por un medio de comunicación que le cause un agravio"*.

Luego, sostuvo que el **artículo 3** de la ley que reglamenta el derecho de réplica, en la parte que interesa, establece lo siguiente: *"Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio"*

De manera particular, sostuvo que la réplica es un mecanismo tendiente a controvertir, necesariamente, la base fáctica de tal información, por lo que su carácter “**agravante**” proviene de los hechos mismos y no de la formulación de juicios de valor que pudieran acompañar esa información.

También explicó que, como se ha dicho antes en esta sentencia, el derecho de réplica participa de una doble faceta: la **individual**, que se dirige a garantizar la protección de la esfera jurídica de las personas, frente a los abusos de los medios de comunicación en su labor informativa y, por otro lado, la vertiente **social**, que se deriva de la primera faceta y tiene por objeto promover un alto nivel de responsabilidad en los medios de comunicación,

²⁴ Visible en el canal oficial de Youtube del Gobierno de México
***** ** *****

²⁵ Sentencia de 23 de agosto de 2017. Ministra ponente: Norma Lucía Piña Hernández

XIMENA BETZABEL LOPEZ DAVILA
70.66.66.30.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130



Sin soslayar que dentro de tales recursos, se expresaron diversas causales de improcedencia del juicio en que se actúa; sin embargo, éstas ya fueron atendidas y analizadas en el apartado correspondiente.

X. DECISIÓN.

Por lo expuesto, al haber sido **infundados** los conceptos de violación, es **procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal** respecto de la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, por los motivos expuestos en el **apartado VIII.4** de esta sentencia.

Por otra parte, al haber sido **fundados** los conceptos de violación y evidenciarse la transgresión del derecho de réplica en favor de la quejosa, ante la negativa verbal de la autoridad responsable, lo procedente **es conceder el amparo y protección de la justicia federal**, por los motivos expuestos en el **apartado VIII. 5** de esta sentencia.

XI. EFECTOS.

Ante el escenario expuesto, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que el **Presidente de la República** realice lo siguiente:

a) Conceda el derecho de réplica a ***** *****, durante la trasmisión de la conferencia mañanera –*al ser éste el mismo medio a través del cual publicó la información inexacta*– y difundirse en el mismo horario y con características similares a la transmisión de la mañanera en que se difundió la información inexacta en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

b) Acorde al artículo 13 de la ley reglamentaria el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y, en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio, salvo que por acuerdo de las partes se requiera de mayor espacio para realizar la réplica, rectificación o respuesta pertinentes.



La secretaria del juzgado **Ximena Betzabe López Dávila**, **certifica** que: la presente foja corresponde a la última parte de la sentencia dictada el **seis de junio de dos mil veintitrés** en el juicio de amparo **1991/2022**; así como que la audiencia se celebró a las **diez horas con once minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés**; sin embargo, la sentencia se engrosa y firma hasta el día de hoy, dadas las cargas de trabajo de este juzgado, como consta con las firmas electrónicas y evidencia criptográfica.

Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 26 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado a través del similar que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. **Doy fe**

EN ESTA FECHA SE GIRAN LOS OFICIOS 11742, 11743, 11744, 11745 y 11746.

En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día **7 DE JUNIO DE 2023**, se notifica a las partes la resolución que antecede, por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. **Doy fe.**

Con fecha **8 DE JUNIO DE 2023** surtió todos los efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. **Doy fe.**

EL ACTUARIO.

**seis de junio de dos mil veintitrés
7460**

XIMENA BETZABE LOPEZ DAVILA
70.6a.66.20.63.6a.66.000000000000000000000000000002.de.sc
24/02/24 14:33:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

58695677_0023000031811165027.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	XIMENA BETZABE LOPEZ DAVILA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.02.de.5c	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/08/23 00:41:07 - 02/08/23 18:41:07	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	63 a4 2e 56 e9 e1 90 d3 69 fe fb 6e 1c 56 d6 6c 0f 2d 02 fc 91 f2 b6 6e ac 8c 68 a5 e2 bb 99 37 aa 9e bf c2 9f ab 2a b8 87 34 f7 d9 6d cd 71 ff ad 4c 6f 1b d5 2e 09 d6 dd 88 2f 1d 1d 84 61 14 83 25 d6 bf 1b 96 b4 36 87 06 f1 35 0b ef e8 79 10 a5 86 ca fa 7d ae b8 d1 29 75 bb 04 07 21 11 dd 84 43 4b ff ef a2 10 0e 82 44 ee 96 dc 30 f4 86 9e e6 74 62 05 03 a2 f5 57 68 05 4e 7f 76 96 3e 2b 72 82 9a 74 dc c9 30 dd 71 f0 11 aa a6 1b 58 97 e0 27 c4 42 f2 93 0e d5 08 01 cb de 4d a4 d0 6a 21 03 62 a2 09 bf 62 34 57 06 40 3c dc 38 b5 89 c2 e6 87 98 4f 5b c0 e6 ea d8 f4 a6 83 ea 45 8f e4 f7 de c5 f1 6b 59 98 89 4f 01 80 71 bd b7 f4 fa d5 be b8 7c 9b 5b 95 2e b2 5c 63 ed 4b de 27 4d 5c 98 69 fe 2d 6e c2 5a 3d 3e 40 d9 d1 0b 2e 68 69 e3 a6 6a 74 fc 32 c1 3e ae 59 0b 26			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	03/08/23 00:41:08 - 02/08/23 18:41:08			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	03/08/23 00:41:07 - 02/08/23 18:41:07			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	27018411			
Datos estampillados:	NcOniqIZ3LS7TNvmz92VHJHbWfc=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Hugo Roberto Pérez Lugo	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2e.43	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	03/08/23 00:49:04 - 02/08/23 18:49:04	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	3a 45 6b 5e 3f 95 b2 38 4d c3 24 6e 05 a4 cc 70 e6 0c 3d 3a 7d e7 6d e5 4a 7b ac b0 20 6d 6c 49 b8 a7 43 f2 cb d6 12 ca ef 52 82 34 20 76 32 d0 03 f0 ee fa c9 bd 88 94 5d 01 56 47 2c ee 02 79 7e cf ac 45 9c dc 4c 6c 8f 9d 16 a5 4f bc 3d f9 6b b3 05 f0 5e 9c c0 9f 1d 28 f4 95 8e d3 ac 02 11 2a 12 58 f3 28 5a 82 cf 24 a0 f4 33 16 26 d2 64 2c 05 bf 0c 3b 82 82 e3 11 09 ac 8e dc a5 03 23 6c ad 6e d0 71 fb c1 e5 d3 89 72 82 83 b2 b4 8c 64 1c f1 63 09 0d 8c 57 bb b1 8c 11 1d 7f dd 52 92 fe 74 cf 2a 26 1e 6a a1 d3 0b a3 b7 c1 b8 4b ed b8 a5 e1 c3 e1 af 3a 5b 34 ed cc b5 a5 e2 b7 88 ee 5e 61 32 57 04 95 20 27 07 39 76 23 d9 56 2b a6 f0 25 4a 84 80 12 06 fd 5e 49 85 f7 00 54 81 00 85 6d 6e 40 b4 93 ff b9 a5 39 8b 3f de fb f8 8d e3 f5 75 42 7d 22 f7 01 27 b3 78 a9 4a			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	03/08/23 00:49:05 - 02/08/23 18:49:05			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	03/08/23 00:49:05 - 02/08/23 18:49:05			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	27021509			
Datos estampillados:	Y60mO9ERYffNcSv8zT0klHVl7Xg=			

El licenciado(a) Ximena Betzabe Lpez Dvila , hago constar y certifico que en trminos de lo previsto en los artculos 8, 13, 14, 18 y dems conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, en esta versin pblica se suprime la informacin considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PJF - Versin Pblica